



Tiempo de lectura: 4 min.

[Jesús Elorza G.](#)

A pocos días de que se inicie formalmente el año escolar 2026-2027 en Venezuela, las habituales declaraciones transmitidas por los medios oficiales por parte del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, exigen algo más que una simple cobertura periodística: demandan un análisis ético y pedagógico riguroso. Para quienes ejercen la docencia dentro del aula pública, la narrativa institucional choca frontalmente con la precariedad cotidiana de las instituciones educativas.

El relato gubernamental insiste en presentar planes de reestructuración, programas de formación docente y la supuesta optimización del sistema escolar como si se tratara de ajustes mecánicos dentro de un funcionamiento regular. Bajo la justificación reiterada del impacto de las sanciones internacionales, se evade la crisis de fondo y se soslaya la responsabilidad administrativa de las gestiones que han dirigido el sector educativo en la última década.

Frente a la convocatoria de un «regreso a clases» bajo condiciones de normalidad, la realidad económica de los educadores refleja un panorama distinto:

- El despido de más de 50.000 educadores: La salida masiva de docentes calificados, ya sea por despido o por renuncia, crea un vacío insustituible. Esto no solo genera una sobrecarga en el personal restante, sino que también disminuye drásticamente la calidad de la enseñanza. Muchas aulas se quedarán sin maestros o

serán atendidas por personal no especializado, lo que compromete el aprendizaje de los estudiantes.

- La diáspora estudiantil: La emigración de familias venezolanas ha provocado una fuga masiva de estudiantes. Esto no solo afecta la matrícula escolar, sino que también desarticula el tejido social de las comunidades educativas. Las escuelas, que deberían ser espacios de encuentro y crecimiento, se ven vacías y sin la vitalidad que aportan los estudiantes.
- El deterioro de las escuelas y la falla de servicios: La infraestructura escolar se encuentra en un estado deplorable, con aulas en ruinas, baños sin agua, y fallas permanentes en el servicio eléctrico. Esta situación insalubre e insegura pone en riesgo la salud y la integridad física de la comunidad educativa, y hace casi imposible el desarrollo de actividades pedagógicas mínimas.
- La falta de comedores escolares: El programa de alimentación escolar, crucial para muchos estudiantes en situación de vulnerabilidad, se ha visto drásticamente reducido o ha desaparecido en muchas instituciones. Para miles de niños, la comida que reciben en la escuela es la única del día. La ausencia de este servicio se traduce directamente en desnutrición, lo que a su vez afecta la concentración, el rendimiento académico y la asistencia a clases.
- Los salarios, pensiones y jubilaciones de hambre de los docentes: Los bajos salarios de los educadores los sitúan por debajo del umbral de la pobreza extrema, forzándolos a buscar otras fuentes de ingresos. Esta situación no solo desmoraliza al gremio, sino que también los obliga a desatender sus responsabilidades en el aula para poder subsistir.
- La pobreza crítica de más del 80% de los hogares: La precariedad económica de las familias venezolanas es un factor determinante en la deserción escolar. Los padres no tienen los recursos para cubrir los gastos básicos de alimentación, ni tampoco para comprar útiles, uniformes o pagar el transporte, lo que hace que la educación de sus hijos se vuelva un lujo inalcanzable.
- La imposibilidad de comprar la canasta básica de alimentos, útiles y uniformes: La hiperinflación y la pérdida del poder adquisitivo han hecho que los gastos relacionados con el regreso a clases sean inasumibles para la gran mayoría de las familias. La prioridad se centra en la supervivencia diaria, relegando la educación a un segundo plano.

En el ámbito curricular, el debate se centra en la orientación pedagógica del sistema. Mientras la vocación educativa exige priorizar la comprensión lectora, el razonamiento lógico-matemático, la excelencia científica y el pensamiento crítico, la línea ministerial mantiene un enfoque predominantemente ideologizado de pensamiento único dirigido a la formación del “Hombre Nuevo” ahora reformulado en la “Mujer Nueva” en honor a la usurpadora y tutelada presidenta encargada Delcy Rodríguez.

A esto se suma la vulneración de la carrera docente mediante el reemplazo de profesionales graduados por personal sin formación pedagógica ni credenciales académicas, fundamentando sus designaciones en la afinidad política por encima del mérito y la preparación técnica. Asimismo, sectores del magisterio denuncian el uso de procedimientos administrativos irregulares y despidos contra educadores que manifiestan su disconformidad con las condiciones laborales vigentes.

Para que el sistema educativo venezolano inicie un proceso genuino de reconstrucción, la comunidad pedagógica señala que no bastan los anuncios mediáticos. Se requieren medidas estructurales prioritarias:

- Sueldos dignos e indexados: Restitución de las convenciones colectivas y garantías de seguridad social para los trabajadores de la educación.
- Presupuesto auditable: Inversión real, descentralizada y transparente para la recuperación de la infraestructura escolar y los comedores.
- Despolitización curricular: Devolución del rigor científico y la autonomía pedagógica a las aulas públicas.

En conclusión, el panorama para el inicio del año escolar es sombrío. La combinación de estos factores estructurales y coyunturales amenaza con acelerar la desintegración del sistema educativo venezolano, con consecuencias humanitarias y sociales de proporciones históricas. La educación, en lugar de ser un motor de desarrollo, se ha convertido en una víctima más de la crisis. El juicio sobre la gestión educativa se definirá por las condiciones reales en las que las nuevas generaciones ejerzan su derecho a una educación pública de calidad.

[ver PDF](#)

[Copied to clipboard](#)